



EL CHILE DE LA UNIDAD POPULAR (1970-1973)

Joaquín LEGUINA

En 1970, Chile tenía una población de casi 10 millones de habitantes, con un PIB per cápita entre 700 y 870 dólares, según diferentes estimaciones. La población activa agraria era inferior al 10%. Una economía bastante más desarrollada que la media latinoamericana. Por otra parte, el peso del Estado había crecido durante las dos presidencias anteriores (especialmente durante el mandato del demócrata-cristiano Frei). El sector público, que en 1965 representaba el 35,7% del PIB, había pasado al 46,9% en 1970. En 1969, la inversión pública representaba el 58,6% de toda la inversión. En el campo financiero, a través de la Corporación de Fomento (CORFO) y del Banco del Estado, el sector público controlaba la casi totalidad del crédito a largo plazo, tanto en moneda nacional como extranjera. En cuanto al crédito a corto, el Banco del Estado realizó durante 1970 el 52% de los préstamos y recibió el 46% de los depósitos.

El aparato estatal contribuía a consolidar el sistema socioeconómico, dando lugar a una presencia creciente de nuevos grupos sociales de empleados públicos. Ello provocó una dependencia nada despreciable del sector privado respecto al público. De esta forma, el Estado, transformado en un instrumento económico poderoso, había legitimado su presencia económica sin especiales resistencias ideológicas. Empero, y en parte como consecuencia de ello, la capacidad dinámica de las grandes empresas del sector privado era reducida.

En otras palabras, Chile era en 1970 un país relativamente desarrollado con una fuerte presencia pública en la economía. En verdad, si se exceptúa a Cuba, Chile era el país latinoamericano con una mayor incidencia del Estado en la economía nacional.

Sin embargo, la gran lacra socio-económica de Chile estaba en la distribución, tanto de la riqueza, como de la renta. Cuando el Gobierno de Frei inició la reforma agraria en 1965, tan sólo el 2% de las fincas abarcaba el 55% de la superficie agrícola. El sector minero, área estratégica para la economía del país, estaba bajo el control de tres compañías extranjeras. En 1970, el 75% de todas las exportaciones (1.110 millones de dólares) lo fueron de cobre. De tal forma que las tres empresas extranjeras citadas tenían en sus manos el 60% de todas las exportaciones del país.

En 1963, antes del Gobierno de Frei, el 3% de las empresas industriales vendía el 51% del producto industrial, ocupaba el 44% de la mano de obra del sector y retenía el 58% del capital. Tan sólo 284 sociedades detentaban el 78% de los activos totales. En las 271 mayores sociedades, los diez accionistas más grandes controlaban más del 50% de la propiedad de 230 de ellas. En la distribución mayorista el 0,5% de las empresas manejaba el 44% de las ventas.

En cuanto a la renta personal, el 10% más rico recibía en 1967 el 40,2% de la renta. El 50% de los perceptores de rentas más bajas tan sólo ingresaba el 17,1% del total. Esta mala distribución de los ingresos, como es obvio, reforzaba los procesos de concentración económica y de la propiedad. En 1970, un 7% de la población obtenía unas rentas medias anuales de 4.300 dólares, mientras que en el 54% de la población menos favorecida la renta anual media era de 212 dólares. El primer estrato mantenía un patrón de consumo asimilable al de los EE.UU., el segundo no conseguía superar el nivel de la pobreza severa. Por otra parte, es preciso señalar que concentración de las rentas, concentración de la propiedad, oligopolización empresarial y

penetración extranjera eran piezas de un mismo mecanismo autoalimentado.

Los rasgos descritos estaban en la base, no sólo de los problemas económicos, también de las tensiones políticas. Sin embargo, para entender éstas y la evolución de los acontecimientos, es preciso describir la evolución experimentada en los años anteriores a 1970.

Evolución previa a 1970

Las políticas del Presidente Frei (1964-1970), incluida la reforma agraria, intentaron beneficiar a los estratos sociales medios, especialmente a los urbanos. En parte, lo consiguieron, pero la tasa de crecimiento de la economía (un 3% en los cuatro últimos años de la década) no permitió incorporar a los beneficios de la redistribución a crecientes masas de trabajadores urbanos que lo demandaban. Paralelamente, se produjo una rápida ampliación del sistema político y una notable aceleración en las organizaciones sociales. Todo ello se vio facilitado por la creciente concentración demográfica en las ciudades.

En Chile, como en otros países americanos, para ejercer el derecho de voto era (y es) necesario inscribirse en el censo electoral. (En 1952 había 1.100.000 inscritos, en 1970, 3.500.000 y en 1973, 4.500.000). El número de trabajadores sindicados pasó de 270.500 en 1964 a 551.000 en 1970. En 1964 se produjeron 564 huelgas con 138.500 huelguistas. En 1970, hubo 1.819 huelgas que afectaron a 656.000 huelguistas. Según datos de la policía, en 1968 se tomaron 5 fábricas y 16 fincas. En 1970, 133 y 368 respectivamente.

Durante los dos primeros años del Gobierno de Frei (1965-1966) se produjo un aumento real de los ingresos en los estratos medios y en el campesinado junto a una notable expansión del gasto público. Esa mayor demanda efectiva encontró capacidades productivas sin utilizar lo que produjo un rápido crecimiento del PIB, pero cuando el gasto público y las remuneraciones de los asalariados sobrepasaron las metas iniciales, el Gobierno hubo de tomar (a partir de 1967) medidas restrictivas. La reforma agraria se frenó. Ello redujo la tasa de crecimiento, pero no consiguió frenar la inflación. Las nuevas demandas sociales quedaron frustradas, exacerbando los conflictos y aumentando la polarización. Mientras la derecha buscaba soluciones políticas propias, la izquierda, que más tarde se coligaría en la Unidad Popular (UP), veía crecer sus

efectivos al hilo de las movilizaciones. Por su parte, la Democracia Cristiana (DC) sufrió una escisión en su ala izquierda que más tarde, con el nombre de MAPU, se integraría en la UP. Así pues la derecha buscó un camino propio para intentar restaurar su antiguo poder, rechazando el entendimiento con la DC, que al final del mandato de Frei se proponía ahondar los cambios iniciados por ella misma. Por su parte, la izquierda, fortalecida, propugnaba una solución más radical. Las condiciones sociales y políticas condujeron a repetir un esquema electoral triangular (tres candidatos). Ello hizo posible el triunfo de Salvador Allende.

La UP, la DC y sus programas

El triunfo electoral de Salvador Allende el 4 de septiembre de 1970 lo fue por el 36,5% de los votos. Jorge Alessandri, el representante de la derecha, obtuvo el 34,9% y Radomiro Tomic, de la DC, el 27,8%. Para llegar a ser proclamado Presidente de la República, al no haber obtenido la mayoría absoluta de los votos en la elección presidencial, Allende necesitaba el refrendo del Parlamento.

Entre septiembre, día de la elección, y noviembre, proclamación de Allende como Presidente de la República, los intentos de desestabilización fueron múltiples en el campo económico (en sólo 15 días el volumen de billetes en manos del público creció un 35%) y en el político, incluida la amenaza de un golpe militar. La intervención de EE.UU. en alguno de estos intentos desestabilizadores está acreditada. Dos días antes del pronunciamiento del Parlamento fue asesinado el Comandante en Jefe del Ejército, general Schneider. Entretanto, la UP y la DC habían llegado a un compromiso consistente en la reforma de la Constitución (Carta Fundamental), compromiso que señalaba una serie de *garantías constitucionales*.

La UP se había formado en 1969, siendo su base de sustentación los dos grandes partidos tradicionales de la izquierda chilena, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC). Este último, el PC, había nacido en 1912 con el nombre de Partido Obrero Socialista y fue en 1921, una vez creada la III Internacional, cuando comenzó a denominarse Partido Comunista de Chile. El dato es relevante, pues el PC chileno había asentado sus bases antes de la revolución soviética. Por su parte, el PS fue creado en 1933 como fusión de distintos grupos de variadas ideologías, desde socialdemócratas hasta anarquistas y trotskistas que habían adquirido significación

durante la crisis al inicio de los años treinta. Este rasgo fundacional permaneció vivo en el PS durante todo el proceso que aquí se describe. A la UP se unió el Partido Radical (PR) (1) de larga tradición republicana. Por otro lado, la UP se nutrió con dos escisiones de la DC. El ya citado MAPU (2) (Movimiento de Acción Popular Unitaria) integrado desde el origen en la UP y, en 1971, una segunda que tomó el nombre de Izquierda Cristiana (IC). Ambas formaciones aportaron a la UP un buen número de intelectuales, cuadros y no pocas ideas.

Las mayores disparidades que afectaron a la UP y que tuvieron expresión ya en la elaboración del programa electoral, provenían del seno del PS. En primer lugar porque la experiencia de alianzas del PS con partidos «burgueses» había tenido malos resultados. Ya la incorporación del PR a la UP estuvo llena de reticencias por parte del PS. Por otro lado, y el asunto era mucho más grave, estos posicionamientos tenían su origen inmediato en los debates que se tuvieron dentro del campo socialista con ocasión del XXII Congreso del PS, celebrado en 1967. Se trataba de decidir la opción sobre las vías de acceso al poder. En las posiciones finalmente tomadas influyeron, sin duda, las dos derrotas sufridas por Allende en 1958 y 1964 y, sobre todo, la Revolución Cubana y el guevarismo, cuya influencia en Latinoamérica era patente en aquellos días. La polémica resolución adoptada por el PS decía así: «La violencia revolucionaria es inevitable y legítima... constituye la única vía que conduce a la toma del poder. El PS considera las formas pacíficas o legales como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada». Sin embargo, esta resolución, con todo lo que tiene de radicalidad, no alteró la concepción institucional, legal, con la cual la UP afrontaba su proyecto político en 1970. Conviene dejar esto claro, pues la citada resolución del PS ha servido para justificar lo injustificable.

El PC, por su parte, era heredero de la línea de «liberación nacional» iniciada en los años treinta y cuarenta. En consecuencia, partidario de alianzas cuanto más amplias, mejor.

(1) El PR se escindió en agosto de 1971, naciendo el PIR (Partido de Izquierda Radical). Este último salió de la UP a finales de 1972, pasando a la oposición.

(2) MAPU significa en el idioma aborigen, «Tierra». En marzo de 1973 este partido se escindió, naciendo el MAPU-OC (Obrero y Campesino); ambos permanecieron en la UP.

La estrategia de la UP suponía que tanto las condiciones ideológicas, como las institucionales, permitían introducir modificaciones en la propiedad (expropiaciones) y en la participación democrática de los trabajadores. Apoyada en la cuota inicial de poder del Ejecutivo, la UP pensaba poder introducir reformas progresivas en la estructura económica que producirían un inmediato cambio ideológico y político. «Sabemos que cambiar el sistema capitalista, respetando la legalidad, la institucionalidad y las libertades, exige adecuar nuestra acción en lo económico, lo político y lo social a ciertos límites, señalados en el programa de Gobierno» (Salvador Allende).

El programa de la UP era claramente anti-imperialista y anti-capitalista, pero era respetuoso con la legalidad, las libertades y, por supuesto, con la regla de la mayoría. Huía, también, del modelo soviético. «El establecimiento de un área de propiedad social no significa crear un capitalismo de Estado. Este área estará dirigida conjuntamente por los trabajadores y representantes del Estado» (Primer mensaje de Salvador Allende al Congreso. 21-V.1971). El programa de la UP tenía un claro carácter estructural, pero debido, quizá, a la falta de experiencia de Gobierno el programa no cuidó suficientemente los aspectos coyunturales y las políticas concretas. Desde el inicio del debate programático se percibieron dos posiciones en un punto siempre clave en el terreno político: *los tiempos*.

La primera posición, anti-imperialista y anti-oligárquica, planteaba abordar la socialización de los latifundios, las riquezas básicas, la banca y las empresas monopólicas. No comenzaba en esta etapa la construcción del socialismo, sólo representaría un avance, una acumulación de fuerzas para abordar, más adelante, la construcción de un nuevo sistema social. En esta posición estaban el PC, un sector del PS, el PR y Salvador Allende.

La segunda posición, aunque minoritaria, sostenía que, desde el primer momento era preciso construir el socialismo. El esfuerzo principal debiera dirigirse a tomar el poder. Se pensaba que la burguesía nacional carecía de empuje, débil e imbricada como estaba con los intereses transnacionales. Esta segunda posición estaba apoyada por sectores significativos del PS, incluido su Secretario General, Carlos Altamirano, y, desde fuera de la UP, por el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario). El MIR era un grupo nacido en la Universidad de Concepción, con anclajes en algunos movimientos sociales y devoto de la Revolución Cubana.

En el campo económico la estrategia básica de la UP consistía en el traspaso al Estado de los medios de producción fundamentales con los que construir el área de propiedad social y el área mixta. Ello debilitaría el poder político de los grupos dominantes y permitiría captar un mayor excedente y mejorar la distribución de la renta. Los recursos se reorientarían hacia bienes de consumo esencial en los que Chile tenía ventajas comparativas, consiguiendo, a la vez, un patrón de consumo más igualitario y menos dependiente de las importaciones. La relación capital/producto se haría así más baja y posibilitaría una integración vertical de la industria que alcanzaría una mayor productividad y mayor ocupación de los recursos existentes (en 1969 la capacidad no utilizada en la industria era del 25%). La profundización de la reforma agraria, la nacionalización de la minería del cobre y el hierro, permitirían, asimismo, obtener mayores excedentes y retenerlos en el país.

El programa de la UP bebió en cuatro fuentes:

1. La idea socialista, según la cual la socialización de los medios de producción es condición *sine qua non* para construir una sociedad no-capitalista.
2. Los estudios sobre la dependencia, tan en boga en aquellos años (véase por ejemplo: el libro de Enzo Faletto y Fernando H. Cardoso, actual Presidente de Brasil) (3), que señalaba la necesidad de nacionalizar las empresas extranjeras y reducir la influencia financiera de los EE.UU.
3. El pensamiento de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de la ONU) sobre la estrategia de desarrollo sustentada en los bienes de consumo esencial.
4. El keynesianismo, inspirador de una política fuertemente redistributiva y reactivadora.

Desde una óptica actual, tanto europea como latinoamericana, el programa de la UP puede parecer radical y, por tanto, inviable. Sin entrar en tales consideraciones ideológicas, conviene comprobar que este programa de la UP no difería tanto del que presentó en la elección presidencial Radomiro Tomic, el candidato de la DC.

(3) *Dependencia y Subdesarrollo en América latina*. Siglo XXI, 1970.

«Los datos demuestran de un modo palmario el agotamiento final del sistema capitalista y de las estructuras jurídico-políticas que le dan expresión.» (Tomic, 1969)

«Es imperativo llevar adelante un programa de gobierno que permita satisfacer las necesidades básicas de todos los chilenos y que comprenda una significativa redistribución de las oportunidades, del ingreso y del poder.» (Programa electoral de Tomic, 1970)

«El mantenimiento del orden establecido es imposible en la práctica, ya que las contradicciones entre la realidad económico-social y el sistema imperante conducirían al país, en breve plazo, al desplome institucional. Las estructuras actuales ya no sirven en Chile. Es impostergable la transformación de la vieja institucionalidad, de base social minoritaria y de expresión capitalista, en un nuevo orden social vitalmente democrático.» (Programa electoral de Tomic, 1970)

«Nacionalizaré inmediata e integralmente las principales empresas productoras de cobre.» (Programa electoral de Tomic, 1970)

«Con el fin de nacionalizar y democratizar el crédito y la gestión financiera se propone la transformación gradual de los bancos comerciales en instituciones cooperativas, la nacionalización de la banca extranjera y la descentralización y regionalización del Banco del Estado.» (Programa electoral de Tomic, 1970)

«La redefinición del papel del Estado exige que éste se convierta en el órgano transformador por excelencia, que dirija, guíe y estimule el proceso de cambio económico y social.» (Programa electoral de Tomic, 1970)

«La meta suprema de este programa, cuyo pilar fundamental es la participación popular, es la sustitución de las minorías por el pueblo organizado en los centros decisivos de poder e influencia que existen dentro del Estado, la sociedad y la economía nacionales.» (Programa electoral de Tomic, 1970)

Asimismo, el programa de Tomic se proponía impulsar las «empresas de trabajadores» para lo cual contemplaba un «fondo para la independencia y el desarrollo» con el cual se adquirirían algunas empresas privadas grandes y medianas y se crearían otras nuevas para entregar su gestión a los empleados y obreros.

En resumen, existía una amplia zona de confluencia entre los programas de Tomic y de Allende. Las dos diferencias

esenciales radicaban en 1) la extensión del área social, 2) la concreción y eficiencia instrumental de las medidas. Mucho más precisas en el programa de Tomic. En todo caso, las coincidencias eran altas. Un acuerdo político con la DC parecía posible desde el punto de vista programático, lo que le hubiera suministrado un considerable apoyo parlamentario a ese programa coligado. No pudo ser, y de poco valdría ahora analizar una ucronía.

Los primeros pasos del Gobierno Popular

Los fracasos anunciados por la derecha chilena no se produjeron. Los resultados políticos económicos y sociales del primer año de Gobierno fueron espectaculares:

1. El PIB creció en 1971 y en términos reales el 7,7%
2. La tasa de paro en el área metropolitana de Santiago cayó del 8,3% en diciembre de 1970 al 3,8% en el mismo mes de 1971.
3. La inflación pasó del 35% en 1970 al 22% en 1971.
4. La redistribución mejoró sustancialmente. La participación de los asalariados en el PIB, que era del 52,8% en 1970 subió el 61,7% en 1971.

Pese al indiscutible éxito, algunos indicadores señalaban ya los problemas que más adelante se iban a agudizar:

- a) La previsión de déficit fiscal fue ampliamente superada. Se previó para 1971 un déficit de 4.500 millones de escudos y éste llegó a los 10.000 millones sobre un gasto total de 36.000 millones.
- b) La cantidad de dinero en manos del público creció un 119% entre diciembre de 1970 y el mismo mes de 1971.
- c) El déficit de la balanza de pagos alcanzó los 341 millones de dólares lo que provocó una fuerte reducción de las reservas en divisas.
- d) Los salarios se dispararon en las empresas expropiadas y, a la vez, en las empresas privadas. Los empresarios, puestos a elegir entre el conflicto que podía llevar a la intervención del Estado, y subir los salarios, optaron por lo segundo.

- e) La nacionalización de la gran minería consiguió menos producción de la prevista. De las 787 miles de toneladas previstas para 1971 sólo se produjeron 571. En todo caso, un 5,7% más que la producción de 1970. Ante la inmediata expropiación, los propietarios de Chuquicamata (la mayor mina del país) aceleraron la extracción de mineral abandonando la remoción de estéril. Ello perjudicó la extracción durante los meses posteriores. El cambio de la propiedad también retrajo la extracción por cuestiones técnicas (especificaciones, repuestos, etc.).

Se habían conseguido buenos objetivos, pero el margen de maniobra se había reducido. En la cúpula dirigente de la UP no se vio, o, con más probabilidad, no se quiso ver el efecto traumático que los desequilibrios financieros podían traer consigo.

En el campo político la coalición de Gobierno consiguió incrementar el apoyo popular. En las elecciones municipales de abril de 1971, la UP alcanzó el 50% de los votos, 14 puntos más que en la elección presidencial. El Gobierno mantenía la iniciativa y tenía enfrente una oposición dividida. Las fracciones más radicales de la UP cayeron entonces en el espejismo de creer detentar un poder casi incuestionado.

La reforma agraria encontró pocas resistencias en la zona central del país, donde los terratenientes ya estaban debilitados por la reforma emprendida durante el mandato de Frei. Pero no ocurrió lo mismo en el Sur. Allí los empresarios medios eran mayoría, trabajaban en sus fincas y ejercían gran influencia social e ideológica en las capas sociales medias de esas provincias.

Entre los funcionarios se produjo una reacción contradictoria. Mientras una parte, ante las subidas salariales, se decantó por la UP, otra rechazó la actitud frecuentemente sectaria de los nombramientos y las promociones, colocándose activamente en contra.

Los cambios en la propiedad industrial redujeron una buena parte del poder de los empresarios, pero eso no significaba una disminución paralela e inmediata de su influencia política.

En el campo internacional, Chile logró que las relaciones con los países latinoamericanos se establecieran con absoluta normalidad y lo mismo ocurrió con los países europeos occidentales. Las relaciones con la URSS y los países del Este europeo se

estrecharon. La nacionalización de las empresas cupríferas norteamericanas, Kennecott y Anaconda, y la decisión del Gobierno de descontar en el pago por la expropiación anteriores beneficios excesivos, fueron las razones esgrimidas por Nixon para justificar públicamente su oposición al gobierno de Allende y su obstrucción a los canales de financiación externa de Chile.

Tras la aparente debilidad de la oposición, paso a paso se fue gestando una nueva coalición dominada por la derecha, por el Partido Nacional (PN), que se propuso y fue consiguiendo un acercamiento a la DC. El cuadro político, de tripolar, evolucionó con rapidez hacia una situación bipolar. El ala conservadora de la DC fue aislando al ala progresista hasta convertirla en estéril. A ello contribuyó la actitud hostil a cualquier acuerdo con la DC por parte de un sector de la UP. La derecha económica y política propició la creación y movilización de «gremios» destinados a realizar oposición y presión fuera del Parlamento. Su primera gran presencia tuvo lugar en noviembre de 1971 con la llamada «marcha de las cacerolas vacías».

Uno de los principales instrumentos, si no el principal, para la organización y dirección de la oposición fueron los medios de comunicación y muy especialmente la empresa editora del diario *El Mercurio*. La UP, que controlaba algunos diarios, radios y revistas, fue incapaz de coordinar y ofrecer un frente sostenible en este campo. La oposición operó allí con mejores criterios técnicos, jerárquicos y desde luego con más recursos económicos. Según el informe elaborado por el Senado norteamericano en 1975. «La CIA apoyó financieramente a *El Mercurio* y preparó material informativo que fue colocado en esa y en otras cadenas de periódicos».

El foco neurálgico del conflicto: el Area de Propiedad Social (APS)

A fin de crear el APS, el Gobierno de la UP utilizó sucesivamente tres procedimientos. El primero fue la negociación y se empleó principalmente en el sector metal-mecánico, donde, además, el Estado contaba desde tiempo atrás con notables paquetes de acciones. En segundo lugar, la requisita o intervención que comenzó por utilizarse en el sector textil para, más tarde, generalizarse. Este procedimiento, especialmente conflictivo, consistía en aprovechar un resquicio legal proveniente de un decreto-ley de 1932 (complementado por normas de 1945 y 1953) y que permitía el control por parte del Estado de una empresa

que practicara el acaparamiento, la especulación o la paralización, afectando al interés colectivo. En muchos casos, bastó con que los trabajadores se declararan en huelga para que el Estado interviniese la fábrica. En tercer lugar, y a partir del final de 1971, el Gobierno de la UP comenzó a utilizar la compra de acciones a través de la CORFO.

Lo primero que hizo la derecha (PN) fue exigir que el Gobierno hiciera pública la lista de empresas que pretendía integrar en la APS. Al no conseguirlo, inició una campaña acusando al Gobierno de querer estatizar toda la industria. Más tarde, calificó de ilegales los actos del Ejecutivo. La DC, por su parte, dirigió sus críticas, no tanto a los objetivos, sino a los procedimientos. Si bien su ala conservadora afirmó que la fórmula estatizadora conducía al control total sobre la vida económica y política. En julio de 1971, la DC envió al Parlamento un proyecto de reforma constitucional donde propuso normas para crear las áreas social, mixta y privada de la economía. Ese proyecto de la DC contenía, en síntesis, los siguientes puntos:

1. Necesidad de una ley específica para *cada empresa* que el Gobierno quisiera integrar en las áreas social o mixta.
2. Se eliminaban las normas que permitían la requisa o intervención. Asimismo se recortaban extraordinariamente las atribuciones de la CORFO para adquirir acciones.
3. Se declaraban nulos todos los actos del Gobierno para adquirir acciones a partir de octubre de 1971.
4. La administración de cada empresa del APS pasaría a los trabajadores de esa empresa, excepto la gran minería del cobre donde el Estado mantendría su presencia.

El proyecto pretendía dejar al Ejecutivo con menos competencias de las que habían tenido los gobiernos anteriores. En cuanto al punto 4), la DC pretendía con él impedir el control estatal y preservar su propia influencia a través de los sindicatos en los cuales tenía un alto grado de presencia. Para la UP tal propuesta no era aceptable, pues equivalía a renunciar a una planificación que recogiera el interés general y no sólo el de los trabajadores de cada empresa. En este punto, el debate entre DC y UP se endureció ideológicamente. La DC acusó al Gobierno de ir hacia un socialismo estatalista de tipo soviético.

A la vista del conflicto planteado cabe hacerse algunas preguntas:

- a) ¿Por qué el Gobierno no se adelantó a la oposición enviando un proyecto de reforma constitucional, como sí hizo con la nacionalización del cobre?
- b) ¿Por qué utilizó el camino de la requisa en perjuicio de la negociación?
- c) ¿Por qué no presentó desde el principio una lista de empresas que habrían de pasar al APS?

En cuanto a la primera cuestión planteada, los contrarios al envío de un proyecto de reforma argumentaban que el proyecto se retrasaría en su trámite parlamentario y saldría de allí aguado. En tal caso, la presión de los trabajadores podía desbordar al Gobierno. En consecuencia, se postergó el envío y se prefirió avanzar (cuestión b)) a través de un estrecho margen legal para, una vez que se ganaran posiciones, remitir el proyecto al Parlamento. En cuanto a la cuestión c), la UP estuvo dividida. Por un lado, la publicación tenía la ventaja de aclarar los propósitos del Ejecutivo, contrarrestando así la campaña de amedrentamiento llevado a cabo por la oposición entre los empresarios medianos y pequeños. Además, serviría para clarificar los objetivos entre los propios partidarios e la UP. Pero tenía dos graves inconvenientes. En primer lugar, las empresas de la «lista» reaccionarían bajando los rendimientos y descuidando el mantenimiento de los equipos. Además, el Estado no estaba en condiciones de hacerse cargo de dichas empresas de inmediato. Necesitaba tiempo.

Cuando la DC envió su proyecto de reforma al Parlamento el Gobierno respondió con un proyecto suyo que contenía las condiciones para que una empresa pasara al APS. Aquellas empresas cuyo capital más reservas en 1969 excediera los 14 millones de escudos pasarían al APS. Eran 254 empresas, cantidad sensiblemente superior a la que realmente el Gobierno pretendía integrar en el APS lo que le daba un margen de maniobra para reducir posteriormente ese número.

A posteriori, y a la vista del resultado final, resulta evidente que la UP debiera haber intentado a lo largo de 1971 un acuerdo con la DC, pero no se pudo o no se quiso. En todo caso no se hizo. Pese a los desajustes macroeconómicos apuntados, el proceso de cambio no sólo encontró apoyos populares, también produjo efectos positivos sobre la producción. En efecto, durante 1971 crecieron la producción agraria y la industrial, especialmente en el área recientemente socializada.

El problema estaba en el lado de la demanda. Una demanda fuertemente expansiva de la que todos los grupos sociales se estaban beneficiando, pero que amenazaba ya con superar a la oferta, disparar la inflación y dejar al país sin divisas.

Desde buena parte del área política de la UP se quería una economía hiperexpansiva destinada a crear las condiciones favorables que permitieran, pasado un tiempo, llamar a un plebiscito, ganarlo y cambiar el marco institucional. Otros sectores de la UP, especialmente una parte notable del Gobierno, estimaban imposible proseguir en 1972 con la política expansiva-redistributiva. Se necesitaba, pensaban estos últimos, aumentar la inversión y la productividad de las empresas, pues la capacidad no utilizada al inicio, que al ponerla en marcha había permitido un apreciable crecimiento industrial durante 1971, ya no tenía margen de maniobra. Se trataba, por tanto, de mejorar los ritmos, la organización y en general la eficacia. El primer año había sido «el año de la redistribución» y 1972 habría de ser «el año de la acumulación».

El segundo año del Gobierno de la UP

En estas condiciones, el Presidente de la República convocó en febrero de 1972 una reunión con los representantes políticos de la coalición gubernamental asistidos por distintos técnicos. Lo que se conoció como «reunión de El Arrayán», lugar de Santiago donde se realizó el encuentro. Se pretendía alcanzar simultáneamente objetivos de difícil o imposible compatibilidad. A saber:

- 1) Disminuir la escasez y frenar el mercado negro que comenzaba a aparecer.
- 2) Evitar una estampida de los precios.
- 3) No retroceder en la redistribución.
- 4) Avanzar en la consolidación del APS.
- 5) Atraer a los pequeños y medianos empresarios.

Esquemáticamente, en El Arrayán hubo dos posiciones. Una, proclive a las medidas de ajuste financiero general y otra, encabezada por el Ministro de Economía, Pedro Vuscovic, partidaria de subir los impuestos sobre el capital y las rentas y del control administrativo de los precios y de las importaciones. Como suele ocurrir cuando se enfrentan dos opciones muy di-

ferentes y se decide por una mezcla de ambas, la resultante es menos eficaz que cada una de las componentes. Fue una reunión fallida que hubo de repetirse («Cónclave de Lo Curro») en junio de 1972. Para entonces, el Gobierno había perdido seis meses.

A medida que la inflación repuntó, las reivindicaciones salariales hicieron acto de presencia. La DC tomó en este punto la vía populista y apoyó las demandas más desorbitadas. Mientras, desde la extrema izquierda, el MIR movilizaba a sectores marginales especialmente los urbanos en pos de más viviendas, más servicios, más tierras.

Los nuevos impuestos no fueron aprobados por el Congreso, desfinanciando los presupuestos cuyo déficit en los primeros siete meses de 1972 alcanzó el 90% del programado para todo el año. Entre enero y junio la cantidad de dinero en manos del público creció un 34,5% y la inflación sufrió un incremento del 27,5%. El déficit de la balanza de pagos subió muy peligrosamente, pese al relativo éxito en la renegociación de la deuda externa.

Entretanto, y ya en diciembre de 1971, el PN y la DC habían iniciado un ataque en sede parlamentaria consistente en recusar a algunos ministros del gabinete para lo cual tan sólo necesitaban la mitad más uno de los votos. La primera recusación presentada por el PN contra Pedro Vuscovic no prosperó al no contar con los votos de la DC, pero ésta presentó una contra el Ministro del Interior, el socialista José Tohá, acusándole de incumplir sus deberes en la preservación del orden público. La moción prosperó y Tohá hubo de abandonar su cargo. Allende lo nombró Ministro de Defensa.

En enero de 1972, se produjo una elección complementaria en el Centro de Chile. Se elegían un diputado y un senador. El PN y DC fueron coligados y ganaron los dos escaños. Ambas operaciones, la recusación de Tohá y la coalición electoral, no dejaron de tener fuertes críticas en el seno de la DC, pero marcaron una línea estratégica, la de los conservadores, que acabaría por imponerse dentro del Partido demócratacristiano.

En febrero de 1972, el Parlamento aprobó la reforma constitucional que acerca del APS había presentado la DC y cuyo contenido ya se ha comentado. Como en otros regímenes presidenciales, el Presidente de la República, según la Constitución de 1925 entonces vigente, tenía derecho de veto sobre una Ley votada en el Parlamento. Una vez vetada por el Presidente, la norma sólo podía prosperar si, al insistir, conseguía los 2/3 de

los votos en el Parlamento. La Oposición (4), con una interpretación absolutamente torticera, sostuvo que bastaba con el 51% de los votos. Allende propuso someter este disenso fundamental al Tribunal Constitucional, institución creada para dirimir los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero tampoco en eso hubo consenso. La cuestión quedó latente.

La DC iniciaba así una vía harto peligrosa, la de deslegitimar al Gobierno, lo cual radicalizó en su contra a sectores de la UP ya de por sí poco proclives al entendimiento con los democristianos.

Este cambio de actitud de la DC tuvo otro efecto devastador sobre las instituciones del Estado. La Contraloría General de la República (5) y el Poder Judicial, que hasta entonces habían mantenido una actitud neutral y legalista, comenzaron a tomar decisiones que contradecían la letra y el espíritu de las leyes. La Contraloría empezó a rechazar los decretos de requisición (intervenciones de empresas), cambiando inopinadamente la línea mantenida hasta entonces. La mayoría del Poder Judicial optó por fallar contra el Ejecutivo las más variadas querellas presentadas por propietarios de empresas y de fincas, entrando en materias que no le competían y en las cuales nunca antes había entrado. Quedó claro que la mayor o menor flexibilidad de las instituciones chilenas no dependía ya sólo de la norma jurídica, sino del poder político de las fuerzas enfrentadas.

A mediados de 1972, la bipolarización política se había consolidado. Para el PN el programa mismo de la UP constituía una amenaza tal que para detenerlo poco importaba quebrar el régimen democrático. La fracción conservadora de la DC se fue alineando rápidamente en posiciones muy similares a las del PN, sin embargo, la fracción moderada de la DC pretendía tan sólo limitarlo, pero a ambas fracciones de la DC la acción conjunta PN-DC les resultaba útil. Para los conservadores, porque les permitía bloquear la acción del Gobierno, acusarlo de actuar ilegalmente y crear así las condiciones para una salida militar. Para los más progresistas, porque les permitía

(4) Los últimos presidentes de Chile no habían contado con mayoría parlamentaria, pero las prerrogativas presidenciales, especialmente el derecho de veto que ahora se negaba, dotaban al conjunto del sistema constitucional de estabilidad.

(5) La Contraloría era un órgano unipersonal encargado de señalar si los actos de Gobierno se atenían a las leyes vigentes. El contralor podía ser destituido por una sola vez por el Presidente de la República.

mantener una posición negociadora con la UP. Esta continuaba dividida entre los partidarios de la negociación (PC, PR y el Presidente) y quienes proponían, y se proponían, «avanzar sin transar».

Ante la confrontación entre dos bloques sociales, una parte ampliamente mayoritaria de las capas medias se decantó contra el Gobierno. La línea estratégica de la UP (alianza de obreros y empleados con las capas medias) quedó algo más que en entredicho. Eso no desanimó a los sectores más izquierdistas, instalados básicamente en el PS, quienes sostuvieron la tesis de que el alineamiento de las capas medias dependía, no tanto de las condiciones económicas en las que éstas se desenvolvían, sino fundamentalmente de la relación de poder que aquéllas percibieran entre los trabajadores y la izquierda, por un lado, y los grandes propietarios y la derecha, por el otro. El síndrome de Humpty-Dumpty, el personaje de Lewis Carrol que ante un atinado comentario semántico de Alicia contestaba: «Lo importante es quien tiene el poder, eso es todo», se había instalado desde tiempo atrás en las mentes de algunos significados dirigentes del PS.

Para contrarrestar las agitaciones gremiales alentadas por la derecha, la UP promovió una creciente participación directa de los trabajadores de las tareas de gobierno. Las mediaciones políticas quedaban así muy reducidas. La confrontación política se transformó en una directa confrontación social. Un ejemplo ilustrativo de esto estuvo en un paro nacional de protesta convocado por el Colegio Médico en mayo de 1972 por presuntas o reales violaciones de la *jerarquía médica* por parte de algunos enfermos.

Ante el agotamiento de la política económica, Salvador Allende convocó de nuevo en junio de 1972 a los partidos de la coalición gobernante. Esta reunión se conoció como «El Cónclave de Lo Curro». Lo Curro es el barrio de Santiago en donde tuvieron lugar los debates. De nuevo aparecieron las dos estrategias, las dos almas de la UP. De un lado, el PC, el PR (6), el Presidente y una parte del PS; de otra, la mayoría del PS. La posición moderada del primer bloque se resume en las palabras escritas en esas fechas en un documento del PC: «La correlación de fuerzas se ha visto afectada en contra de la clase obrera y del Gobierno por errores políticos y económicos. Sería funesto seguir ampliando el número de nuestros enemigos. Por el contra-

(6) Una parte de los radicales, el PIR (Partido de Izquierda Radical), había salido del Gobierno unos meses antes para pasar a la oposición.

rio, deberán hacerse concesiones; neutralizar a algunas capas sociales, enmendando desaciertos tácticos».

En concreto las dos opciones defendidas en Lo Curro pueden resumirse como sigue:

| Opción moderada | Opción radical |
|--|---|
| 1. Consolidar el área social y avanzar sólo en las 90 empresas de la lista entregada por el Gobierno. Buscar un acuerdo con la DC. | 1. Seguir avanzando con rapidez para aumentar el apoyo de los trabajadores. |
| 2. Ajuste financiero. Alza de precios. Reducir el déficit del APS y del presupuesto. | 2. Control administrativo de los precios. Creación de mecanismos de distribución directamente controlados por la población. |
| 3. Disciplina laboral. Control estricto de las subidas salariales. Participación laboral gradual y controlada. | 3. Menos control de los salarios y más énfasis en los impuestos. Confianza en la participación de los trabajadores. |

El Gobierno se inclinó por la opción moderada. El 19 de junio de 1972 Salvador Allende designó un nuevo gobierno. Pedro Vuscovic (7) (independiente que pronto ingresaría en el PS) en Economía y Américo Zorrilla en Hacienda fueron sustituidos respectivamente por Carlos Matus (PS) y Orlando Millas (PC). El Gobierno se dispuso a cambiar la política económica y a buscar un entendimiento con la DC respecto al APS.

El acuerdo con la DC acerca del APS avanzó con cierta rapidez dada la flexibilidad impulsada por el Presidente de la República. Salvador Allende firmó los nuevos proyectos de Ley, pactados con la DC, y retiró algunos vetos anteriores. El debate pasó al Congreso. Sorpresivamente, ya en el Parlamento, la DC se desdijo de los acuerdos alcanzados y procedió a votar sus posiciones iniciales. Naturalmente, el PN lo apoyó. El sector progresista de la DC que había llevado el peso de las conversaciones fue arrollado por el ala conservadora.

(7) «Es el propio pueblo de Chile el que tiene que llevar adelante la política económica del Gobierno popular, en el campo, en las fábricas, en las poblaciones, en cada centro de actividad». Pedro Vuscovic a la revista *Chile Hoy*, 30 de junio de 1972.

El Presidente de la República se vió obligado a vetar la Ley así aprobada y recomenzó el enfrentamiento institucional, pues DC y PN siguieron sosteniendo que bastaba con el 51% y no los 2/3 de los votos para hacer prevalecer el criterio del Parlamento. La frustración de los acuerdos elevó el nivel de la confrontación.

En agosto de 1972, de acuerdo con lo decidido en Lo Curro, el Gobierno devaluó el escudo el 85% para las importaciones y el 33% para las exportaciones. Se establecieron cinco tipos de cambio diferentes según la clase de mercancías. Inmediatamente, se autorizaron subidas de precios que oscilaron entre el 30 y el 150%. En septiembre se autorizaron alzas de precios de los bienes procedentes del APS: estas alzas colocaron la inflación en el periodo enero-septiembre en un 100%. Como consecuencia, se autorizó un reajuste salarial del mismo nivel, el 100%. El déficit presupuestario se duplicó respecto a las previsiones, puesto que las subidas salariales entre los funcionarios no consiguieron financiación en el Parlamento, dada la cerril oposición DC-PN.

Los efectos correctivos, acordados en Lo Curro, se habían venido parcialmente abajo ya antes del paro general de octubre de 1972. Su éxito dependía de la posibilidad de sostener el plan durante un periodo más prolongado, pero la oposición no estaba dispuesta a dar ninguna tregua. En octubre de 1972, la oposición desató un paro de transportistas, que arrastró a otros sectores. El proyecto de Lo Curro quedó definitivamente frustrado.

El paro de octubre de 1972

La derecha había decidido pasar a la ofensiva desde tiempo atrás. En el mes de octubre la ofensiva se desplegó en todos los terrenos. Se inició con una campaña a favor del alza de precios de la única empresa productora de papel («La Papelera», propiedad de los Mathe-Alessandri), transformando el debate a través del papel-prensa en una defensa de la libertad de expresión que nadie atacaba. Todas las confederaciones gremiales (camioneros, comerciantes, agricultores e industriales) apoyaron la petición.

Precisamente en esos días, la Kennecott presentó querellas en los países europeos pidiendo el embargo del cobre chileno. Un tribunal francés recogió la petición y el Gobierno chileno se vió obligado a suspender temporalmente los embarques de cobre hacia Francia.

Las reivindicaciones de los propietarios de camiones habían recibido una respuesta favorable del Gobierno; ello no obstante, el 7 de octubre declararon un paro nacional. Ante tal actitud, el Gobierno decidió detener y llevar ante los tribunales a los dirigentes gremiales. Como respuesta, los transportistas bloquearon las carreteras provocando un gran desabastecimiento. El Gobierno entonces decretó el estado de emergencia, que ponía la responsabilidad del orden público en algunas provincias en manos de las Fuerzas Armadas. Los dirigentes gremiales de autobuses, taxis, distribuidores de combustible, comercio y pequeña industria decidieron sumarse al paro. La DC hizo público su apoyo a la huelga. El 17 de octubre se adhirieron al movimiento el Colegio Médico, el de abogados y la Federación de Estudiantes de Secundaria, controlado por la DC. El dirigente de los camioneros, León Villarín, anunció un «Pliego de peticiones de Chile». Este fue presentado por el comando Nacional de Defensa Gremial, creado el 20 de octubre, y contenía bastantes más cosas que reivindicaciones corporativas, como, por ejemplo, la exigencia de disolución de las organizaciones populares que se encargaban de supervisar la distribución de bienes (las JAP: Juntas de Abastecimientos y Precios) o la de que se promulgara la reforma constitucional sobre el APS. El «Pliego» era una auténtica plataforma política.

El PN y la DC acordaron presentar una nueva recusación contra cuatro ministros. La presión se elevaba por momentos. Los médicos suspendieron la atención en las urgencias, se multiplicaron los actos de violencia, bloqueo de carreteras, sabotajes a líneas férreas y oleoductos.

Entonces Allende realizó un movimiento que sus adversarios no esperaban. El día 1 de noviembre de 1972 dimitió el Gabinete y el día 3 de noviembre nombraba ministros a los tres altos mandos militares, Ejército, Marina y Aire, junto a dos representantes de la Central Única de Trabajadores (CUT). El general Carlos Prats, Comandante en jefe del Ejército, fue nombrado Ministro del Interior. «Mano de santo», inmediatamente el movimiento gremial aceptó las propuestas del Gobierno, las mismas que, semanas antes, había rechazado con virulencia.

Durante el paro, las fuerzas sociales que apoyaban a la UP no habían permanecido con los brazos cruzados. Las fábricas del APS trabajaron a un ritmo extraordinario, las empresas industriales, cuyos dueños pretendían parar, fueron ocupadas y puestas en funcionamiento por los trabajadores, se formaron brigadas de trabajo voluntario, etc., etc.

En todo caso, la estrategia de la confrontación puso fuera de juego a quienes en la UP defendían posiciones moderadas y buscaban acuerdos estables con la DC. En otras palabras, social y políticamente el país se radicalizó y dicotomizó.

La estrategia de la derecha buscaba, de un lado, crear el caos y a través de él ganar las elecciones, ya próximas, que se celebrarían en marzo de 1973. En ellas se renovarían el Congreso y la mitad del Senado. Si la CODE, coalición electoral formada poco antes por el PN y la DC, alcanzaba los 2/3 de los escaños podría destituir legalmente al Presidente de la República. Por otra parte, la oposición continuó con su política de deslegitimación, usando la Contraloría y el Poder Judicial.

En cuanto al primer objetivo, el caos, en forma de desabastecimiento, colas y mercado negro, es evidente que la oposición tuvo éxito, pero ello fue percibido muy contradictoriamente por la población. En efecto, durante el paro de octubre, el Gobierno realizó una encuesta según la cual el 56% rechazaba el paro (80% entre los obreros, 59% en el sector profesional, 40% entre la burguesía media y grande). La UP respondió al desabastecimiento con la distribución directa de bienes esenciales, usando de las empresas de distribución nacionalizadas y de las JAP que vendían directamente productos de primera necesidad a precios oficiales. En todo caso, la normalidad del mercado se rompió, las tiendas se vaciaron, el mercado negro operaba, pero una encuesta realizada entre la población y ante la pregunta: ¿En su opinión, es más fácil o más difícil ahora adquirir productos para su casa? Los resultados, en porcentaje según los estratos de ingreso, fueron los siguientes:

| Dificultad | Nivel de ingreso | | | |
|-------------|------------------|-------|------|-------|
| | Alto | Medio | Bajo | Total |
| Más fácil | 1 | 17 | 75 | 47 |
| Más difícil | 99 | 77 | 19 | 48 |
| No contesta | — | 6 | 6 | 5 |
| Total | 100 | 100 | 100 | 100 |

En un país donde las tiendas estaban vacías, donde era preciso hacer cola para comprar cigarrillos, pollo, pasta o papel higiénico, que una encuesta de unos resultados como los expuestos muestra una composición de clase y un acceso previo a los bienes de consumo verdaderamente injustos e ilustra, a través

del consumo, muchas cosas que globalmente son difíciles de entender, vistas a la distancia de los años.

Bienes que se podían comprar y sobre los cuales no había razones para la escasez desaparecían rápidamente de los comercios simplemente con una falsa noticia. Bastaba que *El Mercurio* anunciara por ejemplo que «El papel higiénico (la pasta dentífrica o cualquier otra mercancía) empieza o escasear» para que se produjera un acaparamiento de esos productos y desaparecieran de las tiendas.

El nivel de desinformación ideológica tomaba con frecuencia tintes siniestros. Dos ejemplos bastarán para mostrarlo.

A finales de 1972, aparecieron en los Andes los supervivientes de un accidente de aviación. Se trataba de unos deportistas uruguayos y sus acompañantes, que viajaban de Montevideo a Chile. En el accidente murieron algunos pasajeros, otros salieron indemnes. Estos últimos, para sobrevivir largos meses entre la nieve, tuvieron que comer carne humana. El día en que esto se supo, *El Mercurio* publicó en primera página una enorme fotografía en color, aterradora, en la cual se veían en la nieve huesos roídos de las extremidades, restos humanos que habían sido usados para sobrevivir. Al lado, a dos columnas, aparecía una «noticia» local bajo el siguiente título: «Escasez de carne en Santiago».

El Gobierno había buscado ayuda alimentaria en los países del Este, también en China, hacia donde viajó Carlos Altamirano, el Secretario General del PS. Como resultado, algunos barcos llegaron de China transportando carne de cerdo (chanchos). «Chanchos chinos pueden contener sustancias venenosas» fue la noticia de *El Mercurio*.

En el área institucional, la derecha jugó no sólo a desestabilizar al Gobierno, sino y sobre todo, a denunciar su ilegitimidad para lo cual, ya se ha dicho más arriba, usó de la Contraloría y del Poder Judicial. Para ello cayó en una contradicción democráticamente insuperable, pues ambas instituciones se salieron de la Ley, es decir, actuaron ilegalmente. En efecto, la Contraloría podía argumentar acerca de si las normas dictadas por el Gobierno lo eran de acuerdo a la Ley o no, pero no podía opinar acerca de la conveniencia de esas normas. Las requisas, por ejemplo, fueron entendidas por la Contraloría conforme a derecho hasta 1972 y a partir de ahí, contradiciendo su actitud anterior, las consideró ilegales. De igual modo, los jueces tomaron partido, negando descaradamente las Leyes en asuntos tales como la Reforma Agraria y otros muchos. Mediante «resolucio-

nes precautorias», absolutamente ilegales, pues estas medidas sólo estaban autorizadas legalmente en contiendas civiles y nunca en lo tocante a derecho administrativo. Al dictar «precautorias» para obstruir las acciones del Ejecutivo, el Poder Judicial se puso al margen de la Constitución. Se trataba de justificar lo injustificable, incluso un eventual golpe de Estado. Pero con tales actitudes, negando la democracia al negar la separación de poderes, no hacían sino suministrar argumentos a las posiciones más radicales de la UP y de la extrema izquierda (MIR) quienes podían argüir, y con toda razón, que la Justicia y, en general, las Instituciones, lo eran «de clase» y mostraban su verdadera faz cuando «las papas queman».

Las elecciones de marzo de 1973

La presencia de los altos jefes militares en el Gobierno dio un margen de tranquilidad. El general Prats había dejado muy claro cual era el propósito de esa presencia en el Ejecutivo. «Estoy profundamente convencido que una salida de fuerza —venga de donde venga— no tiene destino. El conflicto actual sólo puede y debe tener una salida política para que impere una efectiva democracia. Tengo fe en que el Presidente de la República sabrá patrocinar la fórmula que concite el real esfuerzo mayoritario de los chilenos.» Prats intentó por todos los medios, y especialmente en sus reuniones con el entonces Presidente de la DC, Renán Fuentealba, que se produjera un acuerdo político DC-UP, asegurando que salvo ésa no existía solución alguna y en caso contrario todo el sistema institucional se podría desplomar.

A partir de diciembre de 1972, todas las energías políticas de uno y otro lado se volcaron en las elecciones de marzo de 1973. La coalición electoral PN-CD (CODE) estaba, probablemente, convencida de que la crisis económica que se estaba viviendo llevaría a un espectacular fracaso electoral de la UP. Conseguidos los 2/3 del Parlamento (y para ello bastaba con que la UP bajara tres puntos y medio respecto a las elecciones presidenciales donde había obtenido el 36,5%) podrían destituir legalmente al Presidente de la República.

El Gobierno por su parte intentó mantener los grados de redistribución adecuados para lo cual, a principios de 1973, adelantó un reajuste al alza de los salarios y programó la distribución directa de artículos esenciales entre la población. Para ello presentó al Parlamento una subida de impuestos ligada a un «fondo de salarios» con el cual se pagarían las remuneraciones de los empleados públicos. Si la oposición no autorizaba la subida de impuestos, negaría el aumento de sueldos de los funcio-

narios. El Parlamento, dominado por la Oposición, desbarató el proyecto del Gobierno y, saltándose la Constitución, aprobó gastos no previstos en el proyecto del Ejecutivo. El Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional, que le dio la razón jurídica, pero políticamente el proyecto quedó varado.

En noviembre de 1972, Orlando Millas (PC) fue sustituido en el Ministerio de Hacienda por Fernando Flores (MAPU). En Enero de 1973, dos meses antes de las elecciones y en medio de la discusión acerca de las medidas a adoptar en el campo de la distribución, Flores dio a conocer la nueva política de comercialización: 1) canalización de toda producción de las empresas públicas a través de las empresas comerciales también públicas, 2) distribución racionada de 30 productos básicos indeterminados, 3) desarrollo de las JAP (Juntas de Abastecimientos y Precios) controladas por la población.

Las medidas anunciadas por Flores obtuvieron una viva reacción en contra, gran confusión en las filas de la UP y la salida del almirante Huerta, Ministro de Transportes, del gabinete en desacuerdo con esas medidas. La indefinición acerca de los 30 productos a racionar provocó, además, el acaparamiento indiscriminado. Política y económicamente el anuncio de Flores resultó un fiasco.

Con todo, la UP consiguió un éxito sorprendente en las elecciones de marzo, obteniendo un 40% de los votos, casi 4 puntos más que en las elecciones presidenciales de 1970 (8). Una votación tan elevada en medio de una crisis de tal tamaño sólo es explicable por el aumento de la conciencia y de la organización. En efecto, el conflicto había llevado a un fuerte crecimiento de las organizaciones populares. En las fábricas (comités de producción, de vigilancia, de participación), en el campo (consejos campesinos, cooperativas, colectividades de administración, etc), en las ciudades (JAP, organizaciones de salud, centro de madres, juntas de vecinos), en la CUT (aumento de sindicatos de rama y territoriales, así como un incremento sustancial del número de afiliados). La oposición de intereses con los grupos dominantes era diáfana.

Una anécdota ilustra y resume este cambio. Durante una manifestación ante el propio Presidente Allende, un obrero portaba un cartel en el cual se leía: «Este es un Gobierno de mierda, pero es mi Gobierno».

(8) El censo había pasado de 3.660.000 en abril de 1971 a 4.542.000 en marzo de 1973 en parte debido a la reducción de la edad para votar de los 21 a los 18 años.

Empero, este salto cuantitativo y cualitativo también se produjo del otro lado, entre los grupos sociales representados por la oposición. Una rígida bipolarización se iba imponiendo, una progresiva tendencia al enfrentamiento global. Dentro del PN, la votación alcanzada por la UP les llevó a descartar totalmente la vía electoral como forma para desbancar a la izquierda. Similar percepción cundió en un sector creciente de la DC.

En una reunión con Allende, el cuerpo de generales le expresó que estarían dispuestos a seguir en el Gobierno siempre que se cumplieran los siguientes puntos básicos:

1. Despejar la crisis institucional y llegar a un acuerdo con la DC sobre las áreas de la economía.
2. Desarme de los grupos de derecha e izquierda.
3. No permitir desórdenes.
4. Orden en el servicio público.
5. Mejoramiento de las relaciones con los EE.UU.

Comunistas y radicales estuvieron de acuerdo, pero para el PS avenirse a la propuesta significaba renunciar al programa de la UP (9). A finales de marzo, Allende designó un nuevo gabinete sin los militares. La posibilidad, siempre remota, de una consolidación con el apoyo de las Fuerzas Armadas había desaparecido. La incorporación de los militares al Gobierno dejó abierta la tentación de llenar ellos mismos el vacío político latente.

Hacia «el fondo de la noche»

Con la euforia de los resultados electorales, el Gobierno intentó poner en práctica un nuevo plan económico con el fin de paliar la inflación y los déficits fiscal y del área social. En cuanto a la inflación, con un nivel del 10% mensual, una subida de precios en los productos del APS de, por ejemplo, un 70%, que rebajaría el déficit del área pública, significaba un impacto en el índice de precios del 40 al 50%. El mercado negro se estimó en un exceso de la masa monetaria en torno al

(9) El Secretario General del PS, Carlos Altamirano, se presentó a senador en marzo bajo el siguiente eslogan: «Duro con Altamirano que les duele más». Salió elegido.

80% del PIB. Asimismo, comparando el nivel de precios real con el oficial se detectó una diferencia del 100% en los alimentos. La política de contención en las remuneraciones provocó una serie de paros que culminó con la huelga de la mina El Teniente. El nuevo programa económico se esfumó en la lucha cotidiana. El Gobierno hubo de navegar esos meses acosado por una violenta oposición en torno a fuerzas sociales organizadas y bajo la tensión provocada por las diferencias estratégicas en el seno de la propia coalición de partidos que lo sustentaba.

La mina de cobre El Teniente, la más grande del mundo a cielo abierto, era la segunda de Chile tras Chuquibambilla y había sido nacionalizada en 1971. En ella trabajaban 11.000 obreros y empleados. En 1972 produjo 190.000 toneladas de cobre. Un tercio de la producida por la gran minería. La huelga se inició en abril de 1973, una vez pasadas las elecciones. Durante el proceso electoral todos los partidos habían tenido buenas palabras para las reivindicaciones salariales de los mineros. El Gobierno hizo una propuesta, asumiendo una parte de esas reivindicaciones. Los sindicatos obreros, donde la UP tenía gran influencia, acordaron volver al trabajo. En cambio, por primera vez los sindicatos de empleados, con una mayoría de dirigentes vinculados a la DC, rechazaron el acuerdo. Al reiniciarse el trabajo tuvieron lugar actos de violencia y terrorismo para impedirlo. Las carreteras que conducían a la mina fueron tomadas, se produjeron atentados contra los autobuses de la empresa y se desataron desórdenes en Rancagua, ciudad donde tiene las oficinas la mina. El Gobierno se vio obligado a decretar el «estado de emergencia». La actitud intransigente de quienes permanecieron en huelga mostró claramente cuales eran los fines de esa resistencia. Grupos y gremios, que jamás lo habían hecho, se constituyeron en grandes defensores de los trabajadores de la mina. La oposición (PN-DC) destituyó por vía parlamentaria a los ministros de Minería y Trabajo, acusándolos de «perjudicar los intereses de los trabajadores».

El 29 de junio de 1973, un regimiento de carros blindados salió a la calle y pretendió tomar La Moneda, sede de la Presidencia de la República. El golpe fracasó, aplastado por las propias Fuerzas Armadas. Inmediatamente los huelguistas acogieron las propuestas del Gobierno y dieron por finalizada la huelga.

La CUT había dado la orden a los sindicatos de empresa para que en caso de golpe de Estado se tomaran las fábricas. Así lo hicieron el 29 de junio. De ello debieron tomar buena nota quienes esperaban su hora para más adelante.

A pesar de las enormes dificultades, El Gobierno de Allende consiguió mantener sus logros redistributivos por encima de los existentes en 1970, pero el proceso de deterioro institucional parecía imparable. Sin embargo, en julio de 1973 Allende intentó desesperadamente una salida política.

Hay tres salidas: 1) Enfrentamiento, 2) Negociación con la DC, 3) Plebiscito, así lo planteó al Consejo de Ministros. Naturalmente nadie quería el enfrentamiento, al menos nadie en la UP lo verbalizaba, entre otras cosas más graves, porque el resultado era previsible. El PS volvió a negarse a la negociación y consideró prematuro el plebiscito. La Iglesia Católica, y especialmente el Cardenal, vino a echar una mano llamando al entendimiento. El día del Carmen, el 16 de julio de 1973, el Episcopado chileno emitió una declaración bajo el título «La paz en Chile tiene un precio». En él podía leerse lo siguiente:

...«La mayoría de los chilenos tenemos hambre y sed de justicia. La voluntad de realizar profundos cambios sociales con diversas concepciones ideológicas la encontramos en millones de hermanos nuestros, en el Gobierno y en la oposición, que anhelan un Chile construido en el respeto de cada ser humano. A estos grupos políticos y sociales les imploramos que den los pasos necesarios para crear las condiciones de un diálogo que haga posible el entendimiento. Sugerimos una tregua. Los políticos saben cómo realizar este anhelo. Esto permitiría buscar con más calma soluciones duraderas».

En la DC, el sector duro, encabezado por el ex-Presidente Frei, había desplazado en mayo de 1973 al ala moderada. Renán Fuentealba fue sustituido en la Presidencia de la DC por Patricio Aylwin, mano derecha de Frei. Tuvieran o no voluntad de iniciar un diálogo con Allende, la llamada de los obispos, tan clara, no podía ser desoída por la DC. Precisamente en la residencia del Cardenal se reunieron Allende y Aylwin y comenzaron las conversaciones. Allende propuso que se crearan grupos de trabajo, pero la DC consideró que era una operación dilatoria. De todos modos, la propuesta de Aylwin, indicando que los mandos militares reingresaran en el Gobierno a fin de garantizar los posibles acuerdos, fue atendida por Allende, que nombró un nuevo Gobierno con presencia militar. Pero un acuerdo formal con la DC fue imposible y desde luego no lo fue a causa del Presidente de la República, que lo buscó con sincera voluntad.

En agosto de 1973, los movimientos huelguísticos retomaron toda su fuerza y prepararon un paro general. A finales de ese

mes los tres comandantes en jefe, del Ejército, la Marina y el Aire, salieron del Gabinete y fueron reemplazados por generales. Los sectores golpistas iban creciendo en las Fuerzas Armadas y a finales de agosto forzaron a renunciar, en aras de la unidad institucional, al Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, y junto a él a otros generales y almirantes que compartían su posición constitucionalista. Al general Prats le sustituyó al frente del Ejército el general Pinochet.

Cuanto más estrecho se veía el camino, más destacaba el polo radicalizado de la UP, adversario de unos acuerdos con la DC que, en efecto, parecían imposibles, y partidario de organizar y movilizar a los trabajadores para enfrentar a la oposición y prepararse para una confrontación. Respecto a las Fuerzas Armadas, este polo radicalizado sostenía dos hipótesis contradictorias: a) que los militares eran mayoritariamente constitucionalistas y, por lo tanto, el conflicto se mantendría en el ámbito civil, y b) que era posible neutralizar un eventual golpe de Estado llamando a soldados y suboficiales a desobedecer a los oficiales golpistas. Por un lado, compartía la idea de que las Fuerzas Armadas chilenas eran «distintas» a otras latinoamericanas y, por otro, proyectaban en el interior de los ejércitos un rudimentario análisis de clase. Olvidando, entre otras cosas, la especificidad jerárquica de cualquier ejército que pueda llamarse tal.

Aunque constitucionalistas durante largo tiempo, las Fuerzas Armadas chilenas no vivían en ninguna isla ni social, ni ideológica ni territorialmente. Para la oficialidad chilena los grupos sociales de referencia eran los sectores urbanos medio y alto. Su formación anticomunista y su concepción del orden y la disciplina conformaban un cuadro fácilmente manejable por la derecha chilena. Obviamente había elementos que inhibían su intervencionismo. En primer lugar, la existencia de una corriente respetuosa con la democracia y también la magnitud de la represión que habría de ejercerse para aplastar al movimiento popular. Por otra parte, la ideología impartida desde los EE.UU sobre todas las Fuerzas Armadas del continente no había caído en saco roto. A partir de la II guerra mundial (1945) y, sobre todo, después de la revolución cubana (1959), se fue elaborando una concepción que ligaba la «seguridad nacional» a un papel de las Fuerzas Armadas más amplio que el técnico-militar. El Pentágono no había descansado en reforzar esa teoría, preparando a las Fuerzas Armadas latinoamericanas para enfrentar a un enemigo interior difuso y omnipresente. Los movimientos guerrilleros en la región también sirvieron como argumento para pasar de la noción de seguridad territorial a la de seguridad interior. El paso por la

Escuela de las Américas, con sede en Panamá, de muchos de los oficiales latinoamericanos (10) no fue ajeno ni a los golpes de Estado en el Cono Sur ni a la feroz represión que les siguió.

En los primeros días de septiembre, la UP, a instancias de Allende, acordó recurrir al plebiscito. El Presidente anunció a la UP que hablaría al país el 11 de septiembre para convocar dicho plebiscito. El domingo día 9 se lo comunicó al Comandante en Jefe del Ejército, general Pinochet. Esta información aceleró los planes golpistas. En la noche del 10 al 11 se detectaron movimientos de tropas. Al alba, la marina, algunos de cuyos barcos habían vuelto a puerto abandonando unas maniobras conjuntas en alta mar, tomó la ciudad de Valparaíso. El golpe de Estado estaba en marcha. Un golpe militar de nuevo tipo que desató una feroz y cruel represión. Muerte y desolación.

Algunas conclusiones

En cuanto a la responsabilidad histórica acerca del desastre moral, político y humano que representó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y la subsiguiente dictadura, conviene dejar claro que aquélla, la responsabilidad, cae del lado de quienes incitaron, propiciaron y facilitaron la asonada y, por supuesto, de aquéllos que, saltándose la Constitución y las leyes que especialmente les obligaban, tomaron las armas y las volvieron contra el poder legítimo, contra la democracia y contra sus compatriotas. Es decir, el PN, buena parte de la DC y los altos mandos militares que con Pinochet al frente arrebataron el poder por la fuerza. También el Gobierno de los EE.UU, su Presidente, Richard Nixon y su Secretario de Estado, Henry Kissinger, que, según quedó más tarde acreditado ante el Senado norteamericano, subvencionaron los paros y a la prensa de derechas, alentando de diversas formas la sedición y el golpe militar.

Al final de la Presidencia de Alessandri (1958-1964) el modelo liberal se presentaba ante la sociedad chilena como inviable, la modernización que a continuación puso en marcha la DC durante el mandato de Eduardo Frei (Reforma Agraria, papel central del Estado en la economía, etc.) como hemos visto, abrió las puertas a un modelo de transición al socialismo.

(10) En 1966 pasaron por esa escuela 68 oficiales chilenos, 181 en 1970 y 257 en 1973.

La UP se trazó como meta *la creación de las condiciones* para esa transición al socialismo. El programa de la UP no pretendía propiamente iniciar esa transición, sino *crear las condiciones* para que, en el futuro, se iniciara. Sin embargo, las medidas tomadas y, especialmente, la respuesta contundente y virulenta de las clases dominantes llevó a una exacerbación de las movilizaciones sociales de uno y otro lado. En buena medida, la lucha de clases tomó su propia dinámica sin que la instancia política pudiera integrarla. La oposición de las palabras «pueblo» versus «momios» tal era la expresión dual que revisitó el conflicto social, condensaba tres planos diferentes de confrontación: 1) oposición de clase capital-trabajo, 2) oposición a la dominación extranjera (nación-imperialismo) y 3) una pugna por ampliar la participación en la renta.

Es evidente que la UP y su Gobierno cometieron errores, algunos muy graves, pero el programa de cambios profundos con el que fue elegido Salvador Allende era viable en aquel contexto y, es más, en la percepción de la mayoría de los chilenos en 1970 esos cambios eran necesarios. Baste recordar el programa, citado en páginas anteriores, que en las elecciones presidenciales de 1970 llevaba el candidato de la DC, Radomiro Tomic.

En resumen, los objetivos de la UP eran los siguientes: cambiar radicalmente las formas de propiedad, usando los mecanismos legales y, a la vez, poner en marcha unas políticas conducentes a una fuerte redistribución de las rentas. Las políticas redistributivas darían (y dieron) unos rendimientos electorales a corto plazo, mientras que los objetivos estratégicos (socialización de la producción), al cambiar la estructura de poder social, conducirían en el medio y largo plazo a cambios electorales suficientes como para reformar las instituciones (Justicia, medios de comunicación, etc.)

Ambos objetivos exigían una coordinación entre la dirección política y la económica que no se dio en los niveles adecuados. De hecho, con harta frecuencia, ambas entraron en contradicción. Refiriéndose a ello en mayo de 1973, Salvador Allende decía lo siguiente: «Debemos reconocer que no hemos sido capaces de crear una dirección económica adecuada a las nuevas condiciones, que nos ha atrapado la maraña burocrática, que no hemos contado con los instrumentos necesarios para captar excedentes de la burguesía y que la política redistributiva ha ido más allá de las posibilidades reales de la economía».

La dirección política, por su parte, debía manejar una difícil dialéctica: por un lado, ganar apoyos mediante la movilización y, por otro, evitar la polarización que volcara a las capas medias

en su contra. En realidad, se produjo un desbordamiento y se generaron a menudo acciones no controladas ni asumibles por el Gobierno (toma de fábricas, de fincas, etc.) fenómenos que repercutieron muy desfavorablemente entre la pequeña burguesía y en general en las capas medias. En efecto, la propia política de cambios agitó las aspiraciones sociales sin que los partidos de la UP pudieran canalizarlas adecuadamente. Los partidos con menor cohesión orgánica, como el PS, sufrieron de lleno esa tensión, pasando a ser, a menudo, simples transmisores de las posiciones que tomaban previamente las organizaciones populares.

Otro factor que ayudó a complicarle la vida al Gobierno fue el verbalismo simplista de muchos cuadros de la UP que veían en cada caso, por más trivial que fuera, «leyes de la Historia». «Masas, enemigo principal, poder total, revolución» fueron palabras que para lo único que sirvieron fue para asustar y levantar reacciones emocionales negativas. El debate teórico sobre el «poder total», «la dictadura del proletariado» y otros conceptos, amplificado por una gran profusión de escritos, atemorizó a la opinión pública y creó rechazo. Es evidente que estos dirigentes y teóricos, entre las muchas citas de los clásicos que usaban, olvidaron una de Marx: «...la victoria de la fuerza sin frases sobre la fuerza de las frases».

La sombra de la vía armada se proyectó a menudo sobre el proceso. No sólo por la influencia que la revolución cubana ejercía sobre toda Latinoamérica, sino también porque, a medida que se presentaron los graves problemas, sectores minoritarios de la UP y, por supuesto, el MIR, argumentaron con énfasis la necesidad de aprestarse para una confrontación en breve plazo, mediante una alta movilización popular, creando organizaciones paramilitares. Sin embargo, para la mayoría de la UP, y desde luego para el Presidente Allende, tales argumentos carecían de fundamento. «Sólo a partir de una perspectiva extraña a la realidad puede llegarse a la conclusión de que no hay otro camino para el proceso revolucionario chileno que la quiebra y la destrucción del régimen institucional y constitucional» (Allende ante el pleno nacional del PS, Marzo 1972).

Sólo existía una vía y era la institucional y democrática, incompatible con cualquier sueño insurreccional. Nadie en su sano juicio político podía pensar en cabalgar a la vez sobre dos caballos distintos. El objetivo de mantener unida a la UP, que Allende respetó escrupulosamente, llevaba implícito el principio de la unanimidad a la hora de la toma de decisiones. El principio de la unanimidad suele chocar con la eficiencia, pero

en momentos de crisis conlleva, muy a menudo, un desplazamiento, es decir, que las decisiones se tomen «en otra parte». En este caso, en la calle, es decir, en los movimientos sociales. Por ejemplo, tras cada movimiento huelguístico patronal (Lock-out) el Gobierno se encontró con nuevas industrias «tomadas» que pasaban de hecho a manos del Estado sin que el Gobierno lo hubiera previsto, colocando a éste en una situación muy delicada. O devolvía las empresas, frustrando a los trabajadores, o las dejaba en el área social, saltándose sus propias promesas.

La experiencia dirigida por Allende significaba un cambio profundo en la sociedad chilena respecto a la propiedad y el debilitamiento de los grupos dominantes, y era, en principio, viable en tanto que la correlación de fuerzas en 1970 daban un margen de maniobra para un avance sustantivo. Pero el proyecto exigía, también, un acuerdo de centro-izquierda y la atracción hacía él de las capas medias, cosa que por las razones ya descritas se frustró.
